

Se dificulta y encarece logística de envío de alimentos al interior

El colapso del puente San Pedrito, por la crecida del río Espíritu Santo, en el sector Cristal Mayu, comienza a pasar factura a cuatro sectores productivos de Santa Cruz y de Cochabamba que reportan dificultades y encarecimiento de la logística para cubrir la demanda del mercado interno y del exterior.

Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el presidente, Fernando Menacho, dio cuenta de que los centros de faena y los intermediarios que compran ganado vivo en los centros de remate son los más afectados por el derrumbe del puente, aunque aclaró que han recurrido a la antigua carretera a Cochabamba, como ruta alternativa, para asegurar la provisión regular de la proteína al interior.

No obstante, indicó que reportes preliminares indican que los fletes en la logística de transporte de carga se han encarecido por mayor distancia. Detalló que de los 1.200 a 1.500 bovinos que se faenan por día en la capital cruceña, 700 son para el mercado local y el resto para copar la demanda del interior del país.

La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) también registra perjuicios. Según el gerente técnico, Rafael Rivas, los 250 y 270 camiones que por día transportan 5.000 toneladas de carga de exportación en la ruta Desaguadero, Tambo Quemado y Pisiga han comenzado a sentir los efectos en la logística por el mal estado de la ruta antigua a Cochabamba. No se tiene un reporte de efectos económicos.

Otro factor que preocupa a los exportadores es el incremento del flete, atribuido por los camioneros, según Rivas, a la inestabilidad de las carreteras y al incremento de kilómetros por la ruta antigua a Cochabamba.

Fuentes de los sectores avícola y porcicultor de Santa Cruz dieron cuenta de que están sacando la producción por la ruta antigua para asegurar la provisión regular de carnes de pollo y de cerdo en los mercados del interior. No detallaron los volúmenes de venta.

Página Siete / La Paz

Dirigentes del Fondo Indígena deslindan responsabilidades

Los dirigentes ejecutivos de las organizaciones sociales que forman parte del directorio del Fondo Indígena deslindaron responsabilidades sobre la asignación y fiscalización de recursos. Afirmaron que los directores y técnicos hicieron caso omiso a su pedido de transparentar la entidad.

Rodolfo Machaca, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), explicó que desde los años 2009 y 2010 exigieron a los directores y técnicos transparentar el Fondo Indígena.

"La presidenta (Nemesia Achacollo) y el directorio así les hemos exigido, pero los directores y técnicos han hecho caso omiso, por eso nosotros nos hemos constituido en parte civil para que esto se pueda transparentar", dijo Machaca en conferencia de prensa que se realizó en

Palacio de Gobierno, junto a los ejecutivos de la CIDOB, Bartolina Sisa, Conamaq y los "interculturales", luego de reunirse con autoridades de Gobierno.

Consultado sobre las funciones del directorio, Machaca explicó que sólo se reunían y aprobaban proyectos, y los responsables de ver si estaban bien o no los proyectos dependía del equipo técnico del Fondo Indígena. "Para eso hay dirección de proyectos, dirección de seguimiento de los proyectos, como también evaluaciones con la parte financiera, entonces, ellos tenían que manejar todo bien", indicó.

Sobre el control social, dijo que no tenía más atribuciones que recibir informes o sugerir.

El presidente Evo Morales advirtió, el pasado 27 de febrero, que "caerán muchos" exdirigentes de los sectores sociales beneficiarios del Fondo Indígena y afirmó que los exdirectores de la entidad "panfletearon" los recursos destinados a financiar proyectos de desarrollo productivo y social en el área rural.

Convocan a las comunidades entregar descargo de proyecto

Los dirigentes miembros del directorio del Fondo Indígena convocaron a las comunidades que se beneficiaron con proyectos productivos a acelerar la entrega de sus informes con sus respectivos descargos.

"Nuestros beneficiarios, las comunidades beneficiarias, tienen que acelerar sus informes con sus descargos para identificar qué proyectos están ejecutados, cuáles en camino, esto para transparentar el Fondo Indígena", pidió Juanita Ancieta, ejecutiva de las "bartolinas", quien informó que hoy se reunirán con la interventora del Fondo, Lariza Fuentes.

Comunarios recibieron libra de ajo en vez de proyecto millonario

Comunarios de la provincia Camacho, Primera Sección de Puerto Acosta, denunciaron que dirigentes de la Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa" recibieron 1,2 millones de bolivianos del Fondo Indígena para un proyecto de cultivo de ajo, pero a los "supuestos" beneficiarios sólo les llegó una libra de ajo.

El proyecto denominado "Apoyo a la Producción Sostenible del Cultivo de Ajo" tenía el objetivo de beneficiar con una hectárea de plantación de ajo para cada una de las 500 familias de Puerto Acosta; sin embargo, los pobladores sólo habrían recibido una libra de ajo.

Jaime Calamani, de la comisión de base de beneficiarios, explicó que fueron al Fondo Indígena para pedir informes, pero les negaron y tras investigaciones se sorprendieron que el proyecto tenía un financiamiento de 1,2 millones de bolivianos y que se había cerrado "exitosamente".

"Para el descargo, a los comunarios les tendieron una trampa. Les dieron una libra de ajo y a cambio hicieron firmar planillas y pidieron una fotocopia de la cédula de identidad y eso presentaron al Fondo Indígena", explicó Calamani, quien denunció que los dirigentes les informaron que el ajo era un apoyo de la Alcaldía y no parte del Fondo Indígena.

Ante ese hecho, Calamani -acompañado de otros pobladores de la Primera Sección de Puerto Acosta- lamentó que los ejecutivos del Fondo Indígena y la ministra Nemesia Achacollo hayan permitido la malversación de recursos económicos.

"Ahora el resultado es que no existe ni una planta de ajo", indicó Calamani, quien mostró documentación que data de 2010.

Las dirigentes Julia Ramos Sánchez, entonces ejecutiva de la "bartolinas", Felipa Huanca, ejecutiva departamental, y Manuela Huajlliri de la provincia Camacho, firmaron la nota solicitando la aprobación del proyecto.

Los comunarios denunciaron un segundo proyecto "fantasma". Se trata del proyecto "Producción de Forrajes en las Comunidades de la Sección Municipal de Puerto Acosta", que supuestamente se está ejecutando.

Calamani explicó que se trata de plantaciones de forrajes de alfalfa que beneficiaría a 1.000 familias, con la provisión de semillas y terrenos. La inversión para este segundo proyecto sería de 1,8 millones de bolivianos.

Los comunarios pidieron en marzo de 2014 información sobre estos y otros proyectos a los dirigentes ejecutivos del Fondo Indígena; sin embargo, aún no tienen una respuesta.

Aseguran que Evo conocía falencias

El diputado de Unidad Demócrata (UD) y exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, informó que en 2012 el presidente Evo Morales ya conocía sobre las irregularidades en la administración y fiscalización de los recursos del Fondo Indígena.

Incluso -dijo Quispe- durante la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS) en 2012, los exministros de la Presidencia Carlos Romero y de Transparencia Nardy Suño se comprometieron -ante el pedido de los dirigentes- a la reestructuración del Fondo Indígena.

"El presidente Evo Morales ya conocía de las irregularidades y por eso los ministros se comprometieron a reestructurar el Fondo Indígena, pero recién el 2013 hacen auditoría", dijo el parlamentario.

La Contraloría General identificó un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos no ejecutados o inconclusos. Además, fueron identificados otros 100 proyectos que recibieron 74,6 millones de bolivianos y no cerraron de manera formal su labor.